

## Trabajo Fin de Grado

Una aproximación a los determinantes del  
comportamiento judicial: El caso del Tribunal  
Constitucional de España

*An approach to the determinants of judicial behavior: The case of  
the Spanish Constitutional Court*

Autor/es

Alicia Andrés Asensio

Director/es

Eduardo Sanz-Arcega

## **RESUMEN**

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es identificar las aproximaciones teóricas sobre los aspectos relevantes que determinan el comportamiento judicial, y relacionar aquellos con la evidencia empírica que se conoce sobre el proceso de toma de decisiones de los Magistrados del Tribunal Constitucional de España, intérprete al máximo nivel de la constitución en nuestro país. Desde el punto de vista teórico se identifican tres modelos principales -legalista, actitudinal y estratégico-. A tenor de la evidencia empírica, variables atinentes a los tres modelos parecen influenciar el comportamiento del Tribunal Constitucional español.

## **PALABRAS CLAVE**

Tribunal Constitucional de España, modelo legalista, modelo ideológico, modelo estratégico, unanimidad.

## **ABSTRACT**

The objective of this Final Degree Dissertation is to identify the theoretical approaches on the relevant aspects that determine judicial behavior, and relate those with the empirical evidence that is known about the decision-making process of the Magistrates of the Constitutional Court of Spain, maximum interpreter of the constitution in our country. From a theoretical point of view, three main models are identified -legalist, attitudinal and strategic-. Based on the empirical evidence, it seems that variables related to the three models seem to influence the behavior of the Spanish Constitutional Court

## **KEYWORDS**

Constitutional Court of Spain, legalistic model, ideological model, strategic model, unanimity.

## INDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>2. MODELOS DE COMPORTAMIENTO JUDICIAL .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Estatus jurídico.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Composición y organización .....</b>	<b>11</b>
3.2.1 Órganos jurisdiccionales.....	13
3.2.2 Asuntos que ventila el Tribunal Constitucional de España.....	15
I. Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y recurso previo de inconstitucionalidad.....	15
II. Recurso de amparo.....	15
III. Conflictos constitucionales.....	16
IV. Recursos y cuestiones contra las normas forales fiscales vascas .....	16
V. Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales .....	16
VI. Control previo de inconstitucionalidad .....	16
VII. Impugnaciones del artículo 161 de la Constitución .....	17
VIII. Verificación de los requisitos en los nombramientos de los magistrados .....	17
IX. Competencias en todas materias que le atribuyen la Constitución y leyes orgánicas .....	17
<b>4. EL COMPORTAMIENTO JUDICIAL DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....</b>	<b>17</b>
<b>5. CONCLUSIONES.....</b>	<b>23</b>
<b>6. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>24</b>

## RELACIÓN DE ABREVIATURAS

**ART** Artículo

**ARTS** Artículos

**CA** Comunidad Autónoma

**CCAA** Comunidades Autónomas

**CE** Constitución española

**GC** Gobierno Central

**LOT** Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional

**TC** Tribunal Constitucional

**STC** Sentencia del Tribunal constitucional

## 1. INTRODUCCIÓN

Desde 1979, tras la promulgación de la ley orgánica que desarrolla la Constitución, el Tribunal Constitucional (en adelante, Tribunal o TC) ha sido un agente esencial en la conformación del Estado español como Estado social y democrático de derecho. La jurisdicción constitucional ha jugado un papel fundamental en la transformación que supuso para el sistema jurídico la publicación de la Constitución de 1978. El Tribunal ha conseguido apartar las leyes incompatibles con la Constitución, ha interpretado las normas en base a los principios constitucionales y los ha propulsado sobre todos los sectores del ordenamiento jurídico español. Ha sido uno de los constructores del Estado autonómico y ha tenido una labor indispensable como garante del correcto funcionamiento del sistema democrático español.

En este trabajo se ha pretendido realizar una revisión de estudios basados en la Economía de la Justicia con el fin de identificar las aproximaciones teóricas sobre los aspectos relevantes que determinan el comportamiento judicial, relacionando aquellos con la evidencia empírica que se conoce sobre el proceso de toma de decisiones de los Magistrados del Tribunal Constitucional de España, máximo intérprete de la Constitución en nuestro país. Desde el punto de vista teórico, se identifican tres modelos principales: legalista, actitudinal y estratégico. A tenor de la evidencia empírica, las variables atinentes a los tres modelos parecen influenciar el comportamiento del Tribunal constitucional español.

Para llevar a cabo esta investigación y conseguir el objetivo que se pretende se ha realizado una revisión bibliográfica y una síntesis enmarcada en el análisis económico del Derecho. Se han consultado los estudios más recientes y seleccionado los que se han considerado más completos y los que se cumplían con la información necesaria para este trabajo.

La línea que sigue el presente trabajo consiste en cuatro fases diferenciadas. En primer lugar, se ha considerado como base del trabajo la importancia de explicar y analizar los diferentes modelos que sigue el comportamiento judicial. Como se ha anticipado, se explican los tres modelos - legalista, actitudinal y estratégico- que la literatura y la evidencia empírica avalan como modelos judiciales de comportamiento.

Una vez explicado lo anterior el siguiente punto será realizar un recorrido explicativo sobre el Tribunal Constitucional Español. Una breve descripción de este encabeza el segundo punto, para después describir de manera más extensa del Tribunal: composición y organización, estatus jurídico, y competencias del Tribunal.

Tras comprender qué es el Tribunal y la importancia de este órgano en nuestro sistema judicial, se procede al análisis y exposición del tema de este trabajo. Se estudia y analiza el comportamiento de los magistrados del Tribunal supremo. En primer lugar, se plasma una exposición de datos y la necesidad de estudio del comportamiento de los magistrados. En segundo lugar, se entra en el grueso del trabajo, desarrollando los estudios econométricos considerados más relevantes y desgranando los resultados de cada uno de ellos para conseguir el objetivo del trabajo, poder explicar el comportamiento de los magistrados del Tribunal y los factores que influyen en sus acciones y la toma de decisiones de estos. De acuerdo con los resultados alcanzados en la revisión del Estado de la cuestión sobre los factores que determinan el comportamiento de los Magistrados

del TC, puede concluirse que no existe un modelo prevalente, sino que variables incardinadas en los tres modelos influyen el proceso de toma de decisiones de aquellos.

## 2. MODELOS DE COMPORTAMIENTO JUDICIAL

El comportamiento judicial ha sido y es un campo de estudio en expansión a nivel mundial cuyo objetivo principal es la explicación de por qué actúan los jueces de una manera u otra y cuáles son los factores, tanto ideológicos como estratégicos y legalistas que influyen en sus decisiones.<sup>1</sup>

Es en 1922, en Estados Unidos, cuando Charles G. Haines abre este campo de las ciencias políticas con su trabajo *General Observations on the Effects of Personal, Political and Economics Influence of Judges* en el que plantea que las decisiones judiciales se veían influidas por variables tanto psicológicas como sociológicas, más tarde, en la década de los treinta y de los cuarenta aparecen varios trabajos que afianzan dicha hipótesis.<sup>2</sup>

Será en los comienzos del 50 cuando alcanzan una gran expansión y aparecen estudios con una metodología más elaborada, destacan dos trabajos, en primer lugar C.H.Prichett<sup>3</sup> que basó su estudio en un examen de los votos por separado de los diferentes magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre los años 1937 y 1947, se centró en estudiar el “voto disidente” de los magistrados en función de diferentes variables, libertades individuales, política económica etc. Prichett concluyó con este estudio que los magistrados acababan dividiéndose en dos grupos ideológicos; liberales y conservadores. El segundo trabajo, desarrollado por L. Thurstone<sup>4</sup> también centrado en el estudio del comportamiento de los jueces del Tribunal supremo se desarrolló en base a las sentencias emitidas entre 1944 y 1945, en este caso se utilizaron métodos estadísticos que hasta este momento no se habían utilizado en este tipo de estudios.<sup>5</sup>

Más tarde en los años setenta se comienzan a dar nuevos enfoques teóricos como “la psicología proyectiva, la antropología cultural, la estadística etc.” se intenta explicar de manera sociológica el comportamiento judicial, considerando los grupos de presión o el proceso de socialización política como variables influyentes en las decisiones de los magistrados.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional.*, 20: 177-194.

<sup>2</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional.*, 20: 177-194.

<sup>3</sup> C. H. PRITCHETT, *The Roosevelt Court: A Study in Judicial Politics and Values, 1937-1947*, Octagon Books, Nueva York, 1948).

<sup>4</sup> L. THURSTONE y W. J. DEGAS, «A factorial Study of the Supremo Court. National Academic of Science», *Proceedings*, 37, 1951, pp. 628-635).

<sup>5</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional.*, 20: 177-194.

<sup>6</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 20: 177-194.

La literatura y los estudios desarrollados hasta ahora analizan el comportamiento judicial en base a tres modelos de comportamiento; el modelo legalista/formalista, el modelo ideológico/actitudinal y el modelo estratégico o de elección racional (Segal y Spaeth, 2002; Halberstam 2008; Epstein y col 2013).<sup>7</sup>

En primer lugar, en el modelo legalista/formalista, definido como aquel en el que se antepone la aplicación literal de la ley frente a cualquier otra consideración, propone que los jueces y magistrados resuelven o deciden de acuerdo con una interpretación aséptica de la letra de la ley. (Songer y Siripurapu, 2009) destacan en su estudio la claridad ante la ley como eje central y evidencian que en los casos exentos de polémica o controversia son en los que se encuentran mayor evidencia de comportamiento en base a este modelo, y que además se da una unanimidad mayor.<sup>8</sup>

En segundo lugar, el modelo actitudinal. Tiene como definición aquel modelo en el que las decisiones tomadas por el juez tienen su base en los hechos del caso en contra de sus actitudes y valores, es decir, propone que las decisiones del juez pueden estar influenciadas por su ideología políticas y sus propios valores.

En cuanto a la literatura y a los estudios relacionados con este modelo, se distinguen factores ideológicos asociados a este modelo en escenarios judiciales. Variables como el del nombramiento de los magistrados, estudios que evidencian como el consenso que provoca el nombramiento y la afiliación política del encargado de nombrar a los jueces (Basabe-Serrano 2014; Dalla Pellegrina y Garoupa 2013).<sup>9</sup>

A esto se le añade la ideología de los propios jueces, cuanto mayor distancia en términos ideológicos exista entre estos, el disenso será mayor (Hettinger et. al.2004; Goff 2005). También cuanta mayor carga ideológica contenga el caso, la disidencia será mayor (Epstein et. al 2003). Por ejemplo, en los casos relacionados con el derecho civil la unanimidad es menor (Hensley y Johnson 1998; Hettinger et. al. 2004; Epstein y col.2013).

Por último, el modelo estratégico, acepta que el juez cuenta con sus propias preferencias y objetivos, por lo que tratará de maximizar su utilidad; eso sí, se encuentra sujeto al imperio de la ley. La literatura y la evidencia empírica distinguen mayoritariamente tres hipótesis para explicar el modelo y los factores asociados a este. La primera, la hipótesis de Shapiro, en la que este autor resalta que el Tribunal Constitucional es una prolongación del Gobierno Central (Shapiro 1981,

---

<sup>7</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>8</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>9</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>



2002, 2003), por lo que se entiende que los magistrados se inclinan de manera unánime a favorecer disposiciones legales afines al gobierno.<sup>10</sup>

En segundo lugar, la hipótesis de la colegialidad entendida como un elemento implícito en la toma de decisiones del Tribunal que favorece la unanimidad, se entiende la colegialidad como un conjunto de factores como pueden ser la aceptación de grupo, personalidad de los magistrados, y empatía, entre otros (Edwards 2003, Smyth y Narayan 2004). Aunque cabe destacar la dificultad de medir este tipo de factores (lo que ha entorpecido evidenciar empíricamente esta hipótesis), sí existen tres variables que se han estimado de manera econométrica por parte de la literatura para explicar el comportamiento judicial.

En primer lugar, la predisposición de los magistrados a seguir al líder (Stout 2002), como líder se asocia al presidente del Tribunal, atribuyéndole un poder decisorio influyente en el resto de los magistrados (Hensley & Johnson 1998). El número de miembros del Tribunal sería el segundo factor, cuanto menor sea el número de jueces nos encontramos con una mayor unanimidad (Edwards 2003) y el tercer factor, la existencia de evidencia de que cuanto más diferentes sean los magistrados (minoría social, género...) menor probabilidad de unanimidad existe (Hettinger et.al 2003).<sup>11</sup>

La tercera hipótesis asociada al modelo estratégico es la “aversión al disenso” que se ha analizado mediante el análisis de costes y beneficios que suponen al magistrado emitir un voto en contra (Epstein et al. 2011), estando los beneficios relacionados el prestigio que pueden aportar al juez emitir un voto particular frente a los costes, por ejemplo, en relación con la carga de trabajo que supone tanto al juez emitir el propio voto particular.

Mientras que, como ya se ha citado anteriormente, cuanto mayor es la carga de trabajo y menor el número de magistrados son factores favorecedores de la unanimidad, cuanto más tiempo se tarde en emitir sentencia más disidencia entre los magistrados se dará (Hensley y Johnson 1998). La evidencia empírica y la literatura destacan también que asuntos como los relacionados con la aprobación de reformas (donde se modifican las condiciones de nombramiento de los magistrados del Tribunal), son asuntos que pueden incidir en el gado de unanimidad.<sup>12</sup>

Todo esto lleva a concluir que no se debe entender estas corrientes de comportamiento judicial desde la economía de la justicia como corrientes aisladas en las que los órganos jurisdiccionales actúan en base a una o a otra si no como la convivencia entre los tres modelos. De esta manera se comprende que dicho comportamiento no solo se encuentra influenciado en base a la ley, existen

---

<sup>10</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>11</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>12</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

factores tanto ideológicos como estratégicos que no podemos olvidar y que influyen en las diferentes decisiones judiciales.

### **3. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA**

#### **3.1 Estatus jurídico**

El Tribunal es un órgano constitucional que se encuentra regulado en los artículos 159 al 165 de la Constitución española de 1978 (En adelante CE o Constitución). La no inclusión del Tribunal entre los integrantes del Poder judicial español la derivamos del Título IV de la Constitución española. La Constitución delega al Tribunal funciones de carácter esencial para el correcto funcionamiento del Estado social y democrático español como el control de la constitucionalidad de las leyes, el amparo de los derechos fundamentales y la resolución de conflictos de competencias entre comunidades autónomas y Estado.

El TC como órgano constitucional tiene un perfil propio dentro del sistema judicial español. Su función principal a grandes rasgos es una función de control en base a métodos jurisdiccionales, es el "máximo intérprete" de la Constitución, se le encomienda la función de control de la constitucionalidad de las leyes, de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y la solución de conflictos competenciales entre comunidades autónomas (en adelante, CCAA) y Gobierno central (en adelante, GC). Es independiente de los demás poderes y se podría decir que es el encargado de que ninguno de los órganos anteriores (Gobierno y CCAA) como ciudadanos se desvíen o se salgan de los límites y parámetros legales. Con otras palabras, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución Española, teniendo jurisdicción en todo el territorio español, quedando sus competencias también expresamente definidas en el artículo 161 de la Constitución.<sup>13</sup>

Al ser un órgano independiente, no forma parte ni de la Administración de la Justicia ni del Gobierno del Consejo General Del Poder Judicial. Esta sometido tan solo a la Constitución (CE, en adelante) y a la ley orgánica del Tribunal constitucional, Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC) es decir, su propia ley y con carácter supletoria a la ley orgánica del poder judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) y a la ley de enjuiciamiento civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.) en algunas materias de carácter procedimental.<sup>14</sup>

Hasta ahora hemos hecho una definición sobre lo referido a la función general del Tribunal constitucional dentro del sistema de los órganos constitucionales, de su independencia del poder judicial y a su jurisdicción, pero debemos de definirlo también en función de los efectos y sentido

---

<sup>13</sup> Garcia-Pelayo, M. (1981). EL "STATUS" EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1 (1): 11-34.

<sup>14</sup> Garcia-Pelayo, M. (1981). EL "STATUS" EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1 (1).

de sus sentencias emitidas ya que, no solo tiene la fuerza de cosa juzgada si no que vinculan a poderes públicos. La LOTC comienza con la definición del Tribunal como “intérprete supremo de la Constitución”<sup>15</sup>, las interpretaciones del Tribunal en relación con asuntos constitucionales prevalecerán sobre las interpretaciones de otros tribunales y por tanto mediante la doctrina derivada de sus sentencias, autos resolutivos de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad quedarán corregidas. Corresponde al TC el desarrollo del derecho constitucional y la de proporcionar paz jurídica futura, así como la configuración de la realidad constitucional.<sup>16</sup>

La ley orgánica 2/1979 de 3 de octubre de 1979, ha sufrido hasta diez revisiones normativas, la más reciente en 2015, desarrolla las normas establecidas en la Constitución, regula el funcionamiento, el estatuto de sus miembros, procedimientos y condiciones para el ejercicio de poder del Tribunal.

### 3.2 Composición y organización

La composición actual del Tribunal constitucional español está formada por el presidente Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca Trías y los magistrados; Andrés Ollero Tassara, Santiago, Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfredo Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón. Todos los nombramientos, tanto de magistrados como de presidente y vicepresidenta, han sido publicados en el BOE mediante su respectivo Real Decreto.<sup>17</sup>

El Presidente será nombrado por el Rey tras previa propuesta del Tribunal, el periodo de presidencia tendrá una duración de tres años, pudiendo ser este prorrogado (si no coincidiera con la renovación de la presidencia), hasta el nuevo mandato. Sus funciones, son entre otras; representar al Tribunal, presidir y convocar el pleno, salas y secciones, convocar vacantes y concursos, nombrar a los letrados además de ejercer potestades administrativas hacia los miembros del Tribunal.<sup>18</sup>

El puesto de Vicepresidente del Tribunal será elegido por el pleno y tendrá una vigencia de tres años, pudiendo ser este prorrogado (si no coincidiera con la renovación de la presidencia), hasta el nuevo mandato. Su función es, principalmente, sustituir al presidente si se diese una situación de ausencia, vacante u otros motivos legales. También preside la sala segunda del Tribunal y la sección tercera.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Art. 1, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

<sup>16</sup> García-Roca, J. (2004). La consolidación de la democracia y justicia constitucionales. *REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN*, Número extraordinario, 1: 33-50.

<sup>17</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias*. (2016). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>18</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias*. (2016). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>19</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias*. (2016). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

EL Tribunal está constituido por “doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.”<sup>20</sup>. Los Magistrados son designados por un periodo de nueve años y se irán renovando cada tres años por terceras partes.

Figura 1. Organigrama gubernativo<sup>21</sup>



Fuente: web del Tribunal Constitucional

Figura 2. Organigrama jurisdiccional

<sup>20</sup> Art. 159.1. Constitución Española de 1978, BOE-A-1978-31229

<sup>21</sup> *Organigrama gubernativo*. (2016). [Gráfico]. El tribunal, composición, organización y competencias, organización, organigrama jurisdiccional. <https://www.tribunalconstitucional.es>



Fuente: web del Tribunal Constitucional

### 3.2.1 Órganos jurisdiccionales

Las formaciones del Tribunal Constitucional español son tres, Pleno, Salas y Secciones, además cuenta con órganos de apoyo; secretaria de justicia, secretaría general, registro general, letrados y archivo general.<sup>23</sup>

El Pleno, lo componen todos los magistrados del Tribunal. Presidido por el presidente del TC y a falta de éste por el vicepresidente y en defecto de estos dos, el magistrado más antiguo, si se da una situación de igual antigüedad será el de mayor edad.<sup>24</sup>

El Pleno se encarga (entre otro asuntos que sean de su competencia y recaben para sí el pleno, ya sea a propuesta del presidente o de tres magistrados o de los demás asuntos que se puedan atribuir expresamente por una ley orgánica) de determinar la constitucionalidad de los tratados internacionales, de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones legales con valor de ley (a excepción de aquellos que son de mera aplicación de doctrina, en los que el encargado serán las salas), de los recursos y cuestiones en contra de las normas forales Vascas, territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, de los conflictos competenciales entre el Estado y las CCAA, así como de las impugnaciones o resoluciones de las CCAA contenidas en el art.161.2 de la CE, de los conflictos en defensa de la autonomía local y foral, de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado y de las anulaciones en defensa de la jurisdicción del TC.<sup>25</sup>

También es el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal y del nombramiento de cada uno de los magistrados

<sup>22</sup> *Organigrama jurisdiccional*. (2016). [Gráfico]. El tribunal, composición, organización y competencias, organización, organigrama jurisdiccional. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>23</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias*. (2016). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>24</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, El Pleno*. (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>25</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, El Pleno*. (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

de cada una de las salas, elije al presidente y vicepresidente del TC, de recusar de los magistrados del Tribunal, del cese de los magistrados en los casos definidos en el artículo 23 de LOTC, así como de aprobar y modificar los reglamentos del Tribunal.<sup>26</sup>

Para que se puedan adoptar acuerdos en pleno se requiere la presencia de al menos dos tercios de los miembros del pleno. El TC está formado por dos salas, compuesta cada una de estas por 6 miembros magistrados nombrados en el pleno. El presidente de la Sala Primera es el mismo que el presidente del TC y el presidente de la sala segunda el mismo que el vicepresidente del TC. En defecto de estos al igual que en el pleno, serán presididos por el Magistrado más antiguo y si se diera una igual antigüedad será el de mayor edad.<sup>27</sup>

Se encargarán de; “ a) De aquellos asuntos atribuidos a la justicia constitucional que no sean de la competencia del Pleno; b) Del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales relacionados en los artículos 14 a 30 de la Constitución; c) De los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, de los recursos y de las cuestiones contra las normas forales fiscales vascas, de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí, de las impugnaciones de las disposiciones y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas previstas en el artículo 161.2 de la Constitución y de los conflictos en defensa de la autonomía local y foral que les sean deferidos por el Pleno del Tribunal; d) De aquellas cuestiones que habiendo sido atribuidas al conocimiento de las Secciones entiendan que por su importancia debe resolver la propia Sala.”<sup>28</sup>

La organización de los asuntos y que sala será encargada de cada uno de ellos se producirá según lo que se haya establecido en el Pleno a propuesta del presidente. Todos los acuerdos efectuados en salas requieren la presencia de al menos dos tercios de los miembros de cada una de ellas.<sup>29</sup>

Los Magistrados del TC también se encuadran en cuatro Secciones. Corresponderá a éstas la decisión o propuesta sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad de todos aquellos procesos constitucionales. También se encargará del conocimiento y de la resolución de los asuntos de amparo que alguna de las salas les transfiera. Todos los acuerdos tomados en Secciones requerirán al menos de dos miembros con excepción de que exista discrepancia, en este caso se requiera de al menos 3 de sus miembros.<sup>30</sup>

En cuanto a los órganos de apoyo, encontramos la secretaria de justicia, formada por Letrados funcionarios de carrera, que dependen administrativamente del secretario general. La secretaría general, otro órgano de apoyo, estará dirigida por el secretario general, elegido por el pleno del Tribunal constitucional, tendrá como funciones la de ejercer de letrado mayor, apoyo al presidente

---

<sup>26</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, El Pleno.* (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>27</sup> Artículo 8, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

<sup>28</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, El Pleno.* (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>30</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, Secciones.* (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

en la programación jurisdiccional, recopilar, clasificar y publicar la doctrina constitucional del Tribunal.<sup>31</sup>

El registro general es el encargado de gestionar y cursar todo tipo de escritos y/o documentos dirigidos al Tribunal o emanados de él. Por último, toda aquella documentación recopilada por el Tribunal durante el ejercicio de sus funciones se conservará en el archivo general, dirigido por el archivero jefe.<sup>32</sup>

### **3.2.2 Asuntos que ventila el Tribunal Constitucional de España**

Partiendo de la regulación del artículo 161 de la Constitución española, los asuntos que ventila el Tribunal son desarrollados por los diferentes apartados del artículo 2.1 de La ley orgánica 2/1979.

#### **I. Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y recurso previo de inconstitucionalidad.**

a) “Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley” (artículo 2.1.a LOTC)

Esto es el control de constitucionalidad de todas normas con rango de ley ya provengan de CCAA como del Estado Español. Dicho control se realizará mediante el recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. Siendo el primero un recurso directo realizado por el presidente del gobierno, cincuenta diputados o senadores y gobiernos y parlamentos de cada autonomía o el defensor del pueblo. El segundo, la cuestión de inconstitucionalidad puede ser promovido por cualquier órgano jurisdiccional, es un mecanismo prejudicial en el que se decide la ley que se debe aplicar y su validez dependerá del fallo que pueda ir en contra de la Constitución.

#### **II. Recurso de amparo.**

b) “Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución.” (artículo 2.1.b LOTC). Este recurso puede ser interpuesto por cualquier persona ya sea física o jurídica, siendo residente en España o no, en calidad de violación de cualquiera de los derechos y libertades públicas.

---

<sup>31</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, Órganos de apoyo.* (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

<sup>32</sup> *El tribunal, composición, organización y competencias, Órganos de apoyo.* (2021). Tribunal Constitucional de España. <https://www.tribunalconstitucional.es>

### **III. Conflictos constitucionales**

c) “De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.” d) “De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.” d)” bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local.” (artículos 2.1.c, 2.1.d LOTC) Dichos conflictos podrán ser negativos o positivos. En primer lugar, los positivos entre CCAA y Estado español o entre una o más CCAA entre ellas podrán ser planteados tanto por el gobierno como los Ejecutivos Autonómicos, el objeto de estos conflictos reside en los actos, disposiciones y/o resoluciones entre los que pueda existir disputa en relación con la distribución constitucional y estatutaria de las competencias. En segundo lugar, los conflictos negativos son todos aquellos en los que se resuelve la titularidad de la competencia, pudiendo ser promovidos tanto por particulares como por el gobierno de ESPAÑA. También podrán promover un conflicto frente a leyes o en su defecto frente a normas con rango de ley ya sean estatales o autonómicas los municipios y las provincias sobre todo aquello que consideren que vulnere la autonomía local garantizada por la Constitución.

### **IV. Recursos y cuestiones contra las normas forales fiscales vascas**

Los encontramos en la ley orgánica 1/2019, del 19 de febrero que modifica las leyes orgánicas del Tribunal constitucional y del poder judicial, atribuye al Tribunal tanto el conocimiento de los recursos interpuestos como las cuestiones relacionadas con carácter prejudicial por todos órganos jurisdiccionales contra las normas forales fiscales vascas (territorios de Álava, Guipúzcoa Y Vizcaya). Tanto la legitimación, tramitación, interposición y sus efectos y la sentencia de estas cuestiones y recursos se rigen por la ley orgánica del Tribunal constitucional para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

### **V. Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales**

e) “De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.” (artículo 2.1.e LOTC)

Esto es, un procedimiento cuyo objeto es evitar la adhesión de normas internacionales que puedan ser contrarias a la Constitución en el derecho español.

### **VI. Control previo de inconstitucionalidad**

e) “bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.” (artículo 2.1.e bis LOTC). El recurso previo de inconstitucionalidad tiene



por objetivo emanar el texto definitivo de proyectos o propuestas de reforma de los diferentes estatutos de autonomía tras su aprobación por las Cortes.

Este procedimiento que fue suspendido en 1985 se repone con el objetivo de prevenir la adhesión de normas básicas de las CCAA en todos aquellos temas que puedan contradecir a la Constitución. La revisión de estas solo podrá darse a nuevos proyectos de estatuto y propuesta de reforma cuando hayan sido aprobados por las CG y anteriores a la fecha de referéndum cuando este proceso se encuentre incluido en el territorio de origen del texto impugnado.

## **VII. Impugnaciones del artículo 161 de la Constitución**

f) “De las impugnaciones previstas en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución” (artículo 2.1.f LOTC). Es decir, el gobierno tiene la capacidad de impugnar ante el Tribunal las disposiciones normativas sin fuerza de ley y todas aquellas resoluciones emanadas de cualquier órgano de las CCAA, dentro de los dos meses siguientes a su publicación o desde que llegasen a su conocimiento

## **VIII. Verificación de los requisitos en los nombramientos de los magistrados**

g) “De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley.” (artículo 2.1.g LOTC). El Tribunal se encargará de que todos aquellos que sean nombrados magistrados sean nombrados entre ciudadanos españoles magistrados, fiscales, profesores de universidad, funciones públicas o abogados además de ser juristas con más de quince años de ejercicio. También de que ejerzan sus funciones bajo los principios de dignidad e imparcialidad”

## **IX. Competencias en todas materias que le atribuyen la Constitución y leyes orgánicas**

h) “De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas” (artículo 2.1.h LOTC). El Tribunal será competente además de todo lo definido anteriormente, de todas aquellas materias que tanto la Constitución como el resto de las leyes orgánicas atribuyen al Tribunal constitucional español.

## **4. EL COMPORTAMIENTO JUDICIAL DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

El estudio pionero sobre comportamiento judicial de los Magistrados del TC es el de Del Castillo (1987). En él se realiza una exposición de datos para el estudio del comportamiento judicial a través de sentencias emitidas por el Tribunal constitucional desde su creación en 1978 hasta 1985.

El objetivo del artículo cuya intención principal es plasmar el interés de estudio de la Ciencia Política en España en un ámbito hasta ahora problemático. La autora plantea un escenario más que cierto; las necesidades adoptadas por el Tribunal no solo afectan a las partes interesadas si no, que forman parte de la conformación del sistema judicial y democrático de nuestro país además son un reflejo de los valores tanto culturales como morales de la sociedad española, es por esto por lo que es de innegable necesidad comprender el funcionamiento de este organismo y analizar todo aquello que afecte a la toma de decisiones y el porqué.<sup>33</sup>

El estudio se focaliza en los votos particulares emitidos por los magistrados en las sentencias mencionadas anteriormente. El objeto de estudio en primer lugar es conocer el total de coincidencias de votos particulares con el fin de saber si se crearían dos grupos diferenciados de magistrados, con similitudes entre ellos, ya fueren de carácter político, ideológico etc.<sup>34</sup>

Primeramente, se encuentran problemas metodológicos a la hora de agrupación de magistrados se deben agrupar en función de alguna variable, si no, un posible orden aleatorio arrojaría poca claridad y resultados poco significativos. Para solventar este problema se eligen dos sentencias sobre el decreto-ley de expropiación de Rumasa (en adelante, STC 11/83) y ley del aborto (STC 53/85) consideradas con gran carga ideológica, en las que los magistrados se encuentran claramente diferenciados en dos grupos.

La primera hace referencia a la ley del aborto, en la cual, seis magistrados se muestran a favor mientras que los restantes, incluido el presidente del Tribunal votan en contra. La segunda sentencia elegida por la autora hace referencia a la expropiación de Rumasa, en este caso, los grupos se invierten, los que han votado en contra de la ley del aborto, emiten un voto en contra de la expropiación y viceversa. Un magistrado, Rubio Llorente es el único que se agrupa en los dos votos particulares en contra. Este hecho lleva a pensar que existen dos grupos diferenciados en función de la ideología política, “derechas e izquierdas” pero, la autora recalca que sería un error más que problemático determinar que existe carga ideológica en base a solo dos sentencias. Que existen factores ideológicos es innegable, pero se debe entrar mucho más a fondo y estudiar más variables y comportamientos.<sup>35</sup>

El siguiente objetivo del trabajo de Del Castillo (1987) es comprobar, si tras tomar como referencia esta agrupación, se vuelve a presentar una estructura similar de votos particulares en el resto de las sentencias utilizadas. Se utilizan coincidencias en votos particulares de sentencias aprobadas en

---

<sup>33</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional.*, 20.

<sup>34</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional.*, 20.

<sup>35</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional.*, 20.

el pleno, votos particulares de 11 sentencias sobre competencias entre Estado y CCAA, votos particulares en cinco sentencias sobre mayor o menor poder de los partidos y la relación de votos particulares formulados por cada magistrado, magistrados con los que coincide y número de sentencia.

La autora plantea su conclusión y el escenario en el que se encuentra este campo estudio; primeramente, de los datos analizados, puede presumirse “cierta regularidad en el modelo de comportamiento de los grupos de magistrados por lo que se refiere a votos particulares” (Del Castillo, 1987: 181), en los votos de las sentencias utilizados, se encuentra que, dentro de las discrepancias, los magistrados llegan a coincidir en algunas ocasiones. Pero casi nunca se agrupan con los magistrados del grupo contrario. Se afirma que para poder reafirmar y corroborar dichos resultados, se debe realizar un estudio más intenso y amplio consultado, además, sentencias aprobadas en las que se han emitido votos particulares. También se deberían ampliar las áreas de las sentencias ya que en este estudio solo se han escogido dos temáticas, la autora propone, por ejemplo; “el abstencionismo frente al intervencionismo estatal o activismo judicial vs. liberalismo” (Del Castillo, 1987: 185). Por último, añade la necesidad de realizar un “análisis muy matizado” del voto particular y su fundamento para poder definir el comportamiento judicial en base a la ideología, todo esto, complementado con un gran abanico de variables que puedan generar una influencia en las posturas de los diferentes magistrados mediante diversas metodologías.<sup>36</sup>

Queriendo solventar la problemática expuesta por la anterior autora, para llegar al objeto de este trabajo, se han elegido tres artículos más recientes sobre los determinantes que influyen en el comportamiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional de España: dos sobre conflictos de competencia (López Laborda et al., 2018 y 2019). y otro sobre recursos de amparo (López-Laborda et al., 2021).

Se enfoca esta revisión en primera instancia en los conflictos de competencia sucedidos en España desde la creación del Tribunal, tanto en relación con el sentido del fallo como por lo que hace a los determinantes de la unanimidad, por la falta de fundamentos constitucionales en cuanto a la atribución de competencias en España. El TC, viene desde su Constitución configurando el marco normativo del Estado autonómico español. El hecho de que exista una falta de fundamentos constitucionales mencionadas anteriormente hace que los conflictos de competencia entre comunidades autónomas y Estado vengan siendo un tipo de conflictos con una alta carga polémica y objeto de estudio en el campo de las Ciencias Políticas y sociales.<sup>37</sup>

Debido a la falta de desarrollo suficiente en el marco normativo del Estado autonómico, es el Tribunal Constitucional el que ejerce un papel destacado en la construcción de un marco normativo en este campo. Mediante la siguiente revisión bibliográfica (López-Laborda et al., 2018 y 2019) se analiza si el hecho de que sea “en el papel desempeñado por el Tribunal Constitucional puede

---

<sup>36</sup> P. DEL CASTILLO VERA (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 20.

<sup>37</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

inferirse algún modelo prevalente de comportamiento judicial para explicar el proceso de toma de decisiones de los Magistrados”. En ambos trabajos se explota una base de datos con conflictos de competencia verticales y positivos entre comunidades autónomas y el Gobierno central.<sup>38</sup>

En López-Laborda et al (2019) busca analizar si los fallos unánimes pueden ser principalmente explicados por un solo modelo de comportamiento judicial (o por más). Por su parte, en López-Laborda et al (2018) el objetivo es contrastar si variables atinentes a los tres modelos de comportamiento condicionan el grado de unanimidad en las sentencias del Tribunal que ventilan conflictos verticales y positivos de competencia. En ambos casos, los resultados destacan que este modelo sustenta de manera significativa nuestro sistema judicial pero también evidencian que otros factores propios del modelo actitudinal/ideológico sobre todo y del estratégico son claves para poder explicar el comportamiento judicial.<sup>39</sup>

López Laborda et al (2019) se basa en variables condicionantes de los diferentes modelos de conducta -legalista, ideológico y estratégico-. Se obtienen resultados a partir del estudio de 390 resoluciones positivas del Tribunal. En primera instancia se analizan los conflictos en función de su resolución, si fueron unánimes o no, el 79,7% fueron resueltos por unanimidad, siendo mayor esta cuando beneficia a las comunidades autónomas que cuando favorece al gobierno central. Destacamos que en los casos de País Vascos y Cataluña el porcentaje de unanimidad es superior cuando beneficia al gobierno central.<sup>40</sup>

Para ello se ha dividido el estudio en función los tres modelos por separado, atribuyendo a cada modelo diferentes variables vinculadas a cada uno de ellos. El resultado a grandes rasgos es que para poder explicar de manera efectiva el comportamiento judicial en el caso español, los resultados se deben interpretar de manera conjunta y no por separado, no se puede concluir que el sistema judicial español funcione en base a un modelo o a otro, el poder explicativo de los resultados es mucho mayor si se interpreta conjuntamente.<sup>41</sup>

En López-Laborda et al. (2019) dos son las variables del modelo legalista/ federalista con resultado significativo y positivo. Si en el conflicto participa el País Vasco o si la sentencia es estimatoria se incrementa la probabilidad de que la sentencia haya sido dictada por unanimidad. Por otro lado, si el conflicto afecta a más de una comunidad autónoma también tienen importancia significativa ya que determina que es más probable que se de unanimidad si el conflicto afecta solo a una

---

<sup>38</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>39</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>40</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>41</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

comunidad autónoma, también asociado al modelo legalista/ federalista. Cuando más de una comunidad autónoma está involucrada en el conflicto, la ideología de magistrados prevalece. Asociamos este último resultado al modelo ideológico, al igual que la probabilidad de que el Tribunal llegue a unanimidad en un conflicto de competencias cuando el Partido Popular está en el gobierno es menor.<sup>42</sup>

Otra variable para destacar, asociada al modelo estratégico es que si el ponente y el presidente coinciden en ideología se da un aumento de probabilidad de un fallo unánime. Por otro lado, y de manera contraria a lo que se espera en base a la hipótesis de colegialidad (asociada al modelo estratégico) si las dos partes son beneficiadas por el fallo se reduce la probabilidad de un fallo unánime. Esto significa que la tendencia de los jueces es que están más de acuerdo cuando se favorece a uno de los lados. Se relaciona este resultado también al modelo legalista/federalista: el Tribunal tiene preferencia por la claridad en la distribución de competencias entre las CCAA y el Gobierno, que el hecho de que el conflicto tenga una mayor carga de trabajo o de contenido, es decir, que sea más complejo hace que la probabilidad de fallo unánime sea menor.<sup>43</sup>

Como primera conclusión se llega a que, tras el análisis de los resultados, el modelo legalista/federalista parece ser influyente en el comportamiento judicial español, pero existen otros factores ideológicos y estratégicos que determinan el grado de consenso.<sup>44</sup>

En López-Laborda y col. (2018) se ofrece la evidencia de que no se puede explicar el comportamiento del Tribunal como favorecedor ni al gobierno ni a las CCAA. En esta investigación se ofrecen varios resultados adicionales; primero, el papel del Tribunal en la Constitución de un Estado autonómico ha influido de manera positiva en la búsqueda de consenso entre los miembros del Tribunal en los conflictos de competencia. Resultado que incide en la necesidad del modelo legalista a la hora de explicar el comportamiento de los magistrados. Se obtiene evidencia de que factores ideológicos y estratégicos también se deben de tener en cuenta para explicar dicho comportamiento. En concreto, cuando nos enfocamos en identificar los factores explicando cuantos mas magistrados apoyan los fallos, en lugar de enfocarse en resoluciones unánimes, el modelo actitudinal/ideológico es clave en esta explicación.<sup>45</sup>

En todo caso, destaca el resultado de que si el conflicto es resuelto por el Gobierno o por Cataluña se reduce la probabilidad de que la sentencia sea favorable al Gobierno. Esto tiene como consecuencia que los resultados permiten rechazar la hipótesis de que el Tribunal es un

---

<sup>42</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>43</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>44</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2019). Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

<sup>45</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2017). Is the Spanish Constitutional Court an instrument of the central government against the Autonomous Communities? *Constitutional Political Economy*, 29(3), 317–337. <https://doi.org/10.1007/s10602-017-9250-1>

instrumento del Gobierno que va en contra de las comunidades. Los resultados significativos de estas variables muestran que la probabilidad de que el Tribunal para ir a favor del Gobierno aumenta si el conflicto de competencias está interpuesto por una comunidad distinta de Cataluña. Un segundo análisis no permite identificar por qué del resultado especial obtenido para Cataluña, no se conoce si la comunidad presenta unos casos con una base jurídica mayor que el Gobierno y el resto de las comunidades autónomas si el Tribunal está dispuesto a fallar a favor de Cataluña o es que existen otras motivaciones tanto estratégicas o actitudinales que puedan explicar el comportamiento del Tribunal.<sup>46</sup>

Llegados a este punto, en ambos trabajos reseñados sobre los conflictos de competencia, se concluye por último la investigación con una aclaración; los conflictos de competencia solo representan una pequeña parte de los conflictos entre CA Y GC (en los que interviene el TC), Todos estos comparten características reseñables; i) tienen un objeto muy específico, ya que deciden sobre la propiedad una cierta competencia, ii) los conflictos que afectan las leyes se tratan como recursos de inconstitucionalidad. Con otras palabras, los conflictos de competencia solo representan una pequeña parte de los conflictos entre las regiones y el Gobierno nacional que acaban siendo juzgados por el Tribunal. Los autores vuelven a resaltar que no se puede estar seguro de que los resultados de estas investigaciones puedan derivarse a cualquier otra disputa entre estos dos órganos.<sup>47</sup>

Sentado lo anterior, el último trabajo sobre las variables que influyen el comportamiento de los Magistrados del TC se refiere a los recursos de amparo resueltos por sentencia entre 2015 y 2019 (López-Laborda et al., 2021).

Se otorga un análisis de si el comportamiento judicial en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales depende de factores estratégicos e ideológicos y se analiza también la carga de importancia de los factores estratégicos en cuanto al comportamiento del Tribunal cuando se trata de una interposición de recurso de amparo respecto de un poder u otro del Estado.<sup>48</sup>

Para identificar si factores estratégicos e ideológicos afectan al resultado del fallo (en cuanto a favor o en contra), infiriendo en los factores estratégicos, se quiere determinar si el Tribunal adopta un comportamiento deferente respecto a alguno de los tres poderes del Estado. Esto genera la primera hipótesis de estudio: son los factores estratégicos y colegiales como los ideológicos y su convivencia con los factores legales los que explican el comportamiento de los magistrados de Tribunal Constitucional en el periodo de análisis (2015-2019). La segunda hipótesis es si el Tribunal tiene

---

<sup>46</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2018). Is the Spanish Constitutional Court an instrument of the central government against the Autonomous Communities? *Constitutional Political Economy*, 29(3), 317–337. <https://doi.org/10.1007/s10602-017-9250-1>

<sup>47</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2018). Is the Spanish Constitutional Court an instrument of the central government against the Autonomous Communities? *Constitutional Political Economy*, 29(3), 317–337. <https://doi.org/10.1007/s10602-017-9250-1>

<sup>48</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2021). *Determinantes del comportamiento judicial en la tutela de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional de España*.

tratamiento diferenciado a la hora de emitir sentencia en función del poder del Estado que este implicado en el caso.<sup>49</sup>

A tenor de los resultados alcanzados, en España la tutela de los derechos fundamentales estudiada a través de los recursos de amparo por el TC sí depende de factores ideológicos y estratégicos. Con relación a los factores estratégicos queda contrastado que el Tribunal se comporta de una manera o de otra en función de a que poder se le interponga el recurso de amparo. Tanto a nivel de sentencia como a nivel individual los resultados apoyan la hipótesis planteada en el trabajo para explicar el comportamiento judicial del Tribunal Constitucional en relación con la tutela de los derechos fundamentales tantos factores ideológicos como estratégicos importan. Se encuentra evidencia empírica de que el Tribunal adopta una actitud deferente ante un poder u otro del Estado. Especialmente esta actitud deferente hacia el Poder Judicial y particularmente cuando el órgano decisor es el pleno (con respecto a salas y secciones). El pleno tiene menor tendencia a estimar los recursos cuando el Poder Judicial está implicado en el recurso admitido.<sup>50</sup>

## 5. CONCLUSIONES

El Tribunal Constitucional de España, constituido el 12 de julio de 1980 es el órgano judicial máximo intérprete de la Constitución Española, encargado de preservar los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. El diseño del tribunal está inspirado en el sistema de *kelnesiano* en el que la justicia constitucional se encuentra concentrada. La Constitución regula el tribunal constitucional en sus artículos 159 al 165 y, además, el tribunal es regulado en su propia ley orgánica, 2/1979.

Desde su constitución, sus acciones y sentencias no sólo se han adherido a la doctrina jurisprudencial, sino que han ido y siguen conformando el moderno sistema judicial español. Es por esto por lo que el estudio y el conocimiento sobre el comportamiento del tribunal constitucional, así como sus singularidades y sus consecuencias jurídicas y sociales son de vital importancia y de necesario estudio.

El tema que atañe a este presente trabajo radica en la difusa y ambigua regulación que la CE emite en relación con las competencias atribuidas a los diferentes poderes del estado. Es por esto que el tribunal ha sido y es el encargado de formar un marco de referencia legal en el sistema judicial y democrático del país. Esto ha generado que los conflictos de competencia que se han sucedido a lo largo del tiempo en España hayan sido un blanco perfecto para el correcto estudio del comportamiento judicial, al no existir una regulación completa y estrictamente aplicable, estos conflictos están caracterizados por una alta carga polémica, la no posible aplicación de la ley de manera estricta ha hecho que se puedan determinar los diferentes factores que influyen en el comportamiento de los magistrados del tribunal.

---

<sup>49</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2021). *Determinantes del comportamiento judicial en la tutela de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional de España*.

<sup>50</sup> López-Laborda, J., Rodrigo, F., & Sanz-Arcega, E. (2021). *Determinantes del comportamiento judicial en la tutela de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional de España*, Mimeo.



El objeto de este trabajo es poder determinar cuáles son los factores que, a tenor de la evidencia empírica más reciente, explican el modelo judicial en nuestro país desde la perspectiva de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tres son los modelos que, a nivel generalizado, explican el comportamiento judicial. Modelo legalista/federalista, referido a un modelo basado en una aplicación estricta de los preceptos legales, modelo actitudinal, que defiende que el comportamiento de los jueces se ve afectado por su ideología, creencias y propias preferencias y por último el modelo estratégico, aquel que combina los dos anteriores, se explica el comportamiento como una mezcla de influencias personales y actitudinales.

Los resultados se han obtenido a partir de la legislatura vigente, doctrina, jurisprudencia y artículos de revista dedicados al estudio del comportamiento judicial en base a los magistrados del tribunal Constitucional. Estos últimos consisten en el estudio cuantitativo de sentencias emitidas por el Tribunal a lo largo de un periodo de tiempo, mediante la atribución de variables a cada modelo, comprobando la existencia de correlación entre unas y otras, que han permitido arrojar luz al estudio del comportamiento judicial, verificando la hipótesis generalizada de que a pesar de que, en España, el modelo legalista/federalista prevalece sobre el resto, no se debe obviar factores estratégicos e ideológicos que si influyen en dicho comportamiento.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

Basabe-Serrano, S. (2014). *Determinants of Judicial Dissent in Contexts of Extreme Institutional Instability: The Case of Ecuador's Constitutional Court*. *Journal of Politics in Latin America*, 6 (1), 83–107.

C. H. PRITCHETT, *The Roosevelt Court: A Study in Judicial Politics and Values, 1937-1947*, Octagon Books, Nueva York, 1948).

DALLA PELLEGRINA, L., & GAROUPA, N. (2013). *Choosing between the government and the regions: An empirical analysis of the Italian Constitutional Court decisions*. *European Journal of Political Research*, 52 (5), 558–580.

DEL CASTILLO VERA, P. (1987). Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 20.

EDWARDS, H. T. (2003). The effects of collegiality on judicial decision making. *University of Pennsylvania Law Review*, 151 (5), 1639–1690

*El tribunal Constitucional de España*. (2016). El tribunal. <https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx>



EPSTEIN, L., LANDES, W. M., & POSNER, R. A. (2013). *The behavior of federal judges. A theoretical and empirical study of rational choice*. Cambridge, MA: Harvard University Press

EPSTEIN, L., LANDES, W. M., & POSNER, R. A. (2011). *Why (and when) judges dissent: A theoretical and empirical analysis*. *Journal of Legal Studies*, 3 (1), 101–137

GARCIA-PELAYO, M. (1981). El "status" el tribunal constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1: 11-34.

GARCÍA-ROCA, J. (2004). La consolidación de la democracia y justicia constitucionales. *revista jurídica de castilla y león*., Número extraordinario, 1: 33-50.

GOFF, B. (2005). *Supreme Court consensus and dissent: Estimating the role of the selection screen*. *Public Choice*, 122, 483–499

HAINES, C. G. (1922). *General Observations on the Effects of Personal Political and Economic Influences in the Decisions of Judges*. III. LR, 17, 96.

HALBERSTAM, D. (2008). *Comparative federalism and the role of the judiciary*. In G. A. Caldeira, R. D.

HARGUINDÉGUY, J. B., SOLA RODRÍGUEZ, G., & CRUZ DÍAZ, J. (2018). Between justice and politics: the role of the Spanish Constitutional Court in the state of autonomies. *Territory, Politics, Governance*, 8(2), 222–240. <https://doi.org/10.1080/21622671.2018.1557073>

HENSLEY, T. R., & JOHNSON, S. P. (1998). *Unanimity in the Rehnquist Court*. *Akron Law Review*, 31 (3), 387–408

HETTINGER, V. A., LINDQUIST, S. A., & MARTINEK, W. L. (2004). *Comparing Attitudinal and Strategic Accounts of Dissenting Behavior on the U.S. Courts of Appeals*. *American Journal of Political Science*, 48 (1), 132–137

HETTINGER, V. A., LINDQUIST, S. A., & MARTINEK, W. L. (2004). *Comparing Attitudinal and Strategic Accounts of Dissenting Behavior on the U.S. Courts of Appeals*. *American Journal of Political Science*, 48 (1), 132–137

KELEMEN, & K. E. WHITTINGTON (EDS.), *The Oxford handbook of law and politics*. Oxford: Oxford University Press

L. THURSTONE y W. J. DEGAS, «A factorial Study of the Supremo Court. *National Academic of Science*», *Proceedings*, 37, 1951, pp. 628-635).

LÓPEZ-LABORDA, J., RODRIGO, F., & SANZ-ARCEGA, E. (2018). *Is the Spanish Constitutional Court an instrument of the central government against the Autonomous Communities? Constitutional Political Economy*, 29(3), 317–337. <https://doi.org/10.1007/s10602-017-9250-1>

LÓPEZ-LABORDA, J., RODRIGO, F., & SANZ-ARCEGA, E. (2019). *Consensus and dissent in the resolution of conflicts of competence by the Spanish Constitutional Court: the role of federalism and ideology*. *European Journal of Law and Economics*, 48(3), 305–330. <https://doi.org/10.1007/s10657-019-09631-8>

LÓPEZ-LABORDA, J., RODRIGO, F., & SANZ-ARCEGA, E. (2021). *Determinantes del comportamiento judicial en la tutela de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional de España*, MIMEO.

SEGAL, J. A., & SPAETH, H. J. (2002). *The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited*. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. Published. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511615696>

SHAPIRO, M. (1981). *Courts. A comparative and political analysis*. Chicago: The University of Chicago Press.

SHAPIRO, M. (2002). *The success of judicial review and democracy*. In M. Shapiro & A. Stone Sweet (Eds.), *On law, politics and judicialization*. Oxford: Oxford University Press.

SHAPIRO, M. (2003). *Judicial review in developed democracies*. *Democratization*, 10 (4), 7–26

SMYTH, R., & NARAYAN, P. (2004). *Hail to the Chief! Leadership and Structural Change in the Level of Consensus in the High Court of Australia*. *Journal of Empirical Legal Studies*, 1 (2), 399–427

SONGER, D. R., & SIRIPURAPU, J. (2009). *The unanimous decisions of the supreme court of Canada as a test of the attitudinal model*. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, 42 (1), 65–92.

## **NORMAS Y JURISPRUDENCIA UTILIZADAS Y CITADAS**

Constitución Española de 1978. Cortes Generales  
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 Referencia: BOE-A-1978-31229

SENTENCIA 53/1985, de 11 de abril (BOE núm. 119, de 18 de mayo de 1985)

SENTENCIA 111/1983, de 2 de diciembre (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1983)

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Jefatura del Estado  
«BOE» núm. 239, de 5 de octubre de 1979 Referencia: BOE-A-1979-23709

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

